

DILIGENCIAS

Seguidas en la 3ª sala de la Corte Suprema de Justicia con motivo de un escrito de querrela que presentó el O. fiscal del tribunal superior del Estado de Sinaloa, contra el Lic. D. Luis G. Pacheco, Magistrado del tribunal de Circuito de Mazatlan.

PEDIMENTO FISCAL EN 2ª INSTANCIA.

C. Magistrado de Circuito.

El Promotor fiscal, en el juicio á que se refiere este toca, ante V. dice: que ha examinado con el debido detenimiento todas y cada una de las diligencias y disposiciones emanadas del juzgado de Distrito de Veracruz, con respecto al naufragio del bergantin goleta inglesa «Juanita», y observa: que el auto dictado el 16 de Mayo último, constante á fojas 48 y 49 del expediente, no está en conformidad con las prevenciones del arancel de aduanas marítimas y fronterizas de los Estados Unidos Mexicanos, de 1º de Enero de 1872; y es perjudicial á los intereses de la hacienda pública federal.

El C. juez de Distrito por mera equidad, y con pretexto de no existir en el arancel citado, ninguna disposicion que fije la cuota que se debe pagar por las mercancías que se venden en subasta pública judicial, por el abandono que hagan de ellos los consignatarios, en su auto mencionado determinó, que las venidas á los Sres. R. C. Ritter Cº, R. Varela Cº y German Kroucke Cº que renunciaron, pagasen el cuarenta y cinco por ciento sobre el valor del remate, fundado en el art. 48 del arancel.

Es evidente C. Magistrado, que el caso que nos ocupa, como muy bien ha dicho el C. administrador en la comunicacion que dirigió al juzgado el 17 de Mayo, que se registra á fojas 52 y 53, no es mas que una simple renuncia de consignacion, sujeta desde luego á los artículos comprendidos en el cap. 8º del repetido arancel de aduanas.

En dicho capítulo está prevista la dificultad presentada por el juez de los autos, pues en él hay prevencion expresa, de que si se venden los efectos en almoneda como se han vendido los que venian en el bergantin inglés «Juanita», el remanente de las ventas despues de satisfecha la hacienda pública y los gastos que se hayan ocasionado, quede de tal ó cual manera.

El art. 62, que es el que hace tal prevencion, está clarísimo; exige que se satisfaga á la hacienda pública, sin meterse á reducir los derechos que á este correspondan; luego debe entenderse que estos derechos deben cobrarse con arreglo á los establecidos en la tarifa, que no puede variarse por ninguna autoridad según el art. 19, á no ser que para esto obtengan previamente el consentimiento del Congreso de la Union, de conformidad con la fraccion 1ª del art. 112 de la Constitucion general.

Así es que en virtud de estas disposiciones, el C. Juez de Distrito debió haberse abstenido de fijar la parte de derechos que los efectos vendidos habian de pagar á la aduana, dejando á ésta expedita á que cobrara los que marca la tarifa, y no que hizo cosa distinta, fundado (aunque por analogía) en el art. 48.

Es visto que este artículo no tiene analogía ninguna con nuestro caso, porque él se refiere á mercancías que se hayan arrojado al mar, ó vendido por causa de arribada forzosa; y del que hablamos, trata de renuncia de consignacion de mercancías, sujeto á prevenciones particulares que no admiten ni discusion.

Por lo tanto, el Promotor pide á V. que: atendiendo debidamente las razones expuestas, se sirva enmendar el auto de que ha hecho mencion, en lo relativo á los derechos que se fijaron por el juzgado de Distrito á los efectos salvados del bergantin goleta inglés «Juanita» y que se vendieron en almoneda pública, por la renuncia que hicieron de ellos los consignatarios, previniendo que estos derechos se satisfagan con suje-

ción á lo que determina el arancel de aduanas marítimas tantas veces citado.

Zaragoza, Octubre 28 de 1873.—*Eugenio Sanchez.*

Sentencia de 2ª Instancia.

Puebla de Zaragoza, 21 de Noviembre de 1873.—Vistas las diligencias practicadas en el juzgado de Distrito de Veracruz, en averiguación del naufragio del bergantin goleta inglés «Juanita,» acaecido en la noche del 1º al 2 del mes próximo pasado de Abril, en el arrecife de la anegadilla, manifestado por su capitán D. Juan Herbert: vista la comunicacion del C. administrador de la aduana marítima de ese puerto, en que participaba las medidas que habia dictado para auxiliar inmediatamente al referido vapor, y procurar su salvamento, y en caso contrario, el trasbordo de todo su cargamento, de acuerdo con los consignatarios Sres. Leví y Cª: vistas tambien las declaraciones del expresado capitán Herbert, y toda la tripulacion que venia á sus órdenes, así como el testimonio que se mandó sacar y traducir del inglés al español del libro de Bitácora del vapor «Juanita,» en el viaje que hacia de Liverpool á Veracruz y en el que acaeció el siniestro referido: el acuerdo judicial de la mayoría de los consignatarios parciales de las mercancías que conducia dicho vapor, en el que se comprometieron á recibir las que se salvaren, en el estado en que se encontrasen, por sus respectivas marcas y números, pagando á los consignatarios del buque todos los gastos correspondientes y que en proporcion se hubiesen originado por causa del salvamento: el auto de 19 de Abril, en que se declaró: que el expresado naufragio fué forzoso, y que en él no resulta culpa alguna por parte del capitán y tripulantes que merezca la imposición de alguna pena, y en el que se aprueba el acuerdo de los consignatarios, con exclusion de los Sres. Rosoncke y Cª, R. C. Ritter y Cª y R. Varela y Cª, por el aban-

dono que habian hecho de sus mercancías, las que se prevenia se avaluaran y vendieran en pública subasta: el de 16 de Mayo, en que se previno, que los efectos abandonados por los consignatarios expresados, que fueron vendidos en pública subasta, y cuyo precio no alcanzaba para satisfacer en su totalidad los derechos de la hacienda pública que previene el arancel vigente, paguen solo un cuarenta y cinco por ciento sobre el valor del remate, atendiendo á la mente del art. 48 del arancel, y á que el caso es extraordinario y no está previsto: las observaciones que oportunamente se hicieron á esta resolucion por el C. administrador de la aduana marítima, pidiendo su reforma, por el perjuicio que la Hacienda pública resentiría de llevarse adelante en sus términos: el que se pronunció en 19 del mismo Mayo disponiendo que se estuviera á lo mandado con solo la diferencia de que en lugar de cobrarse el cuarenta y cinco por ciento, fuera el cuarenta y nueve ó cincuenta; la cuenta y liquidacion presentada por los Sres. J. Leví y Cª, como comisionados que fueron nombrados por el juzgado, y la aprobacion que le recayó: la comunicacion dirigida á este Tribunal por el Ministerio de Justicia, insertando la que el Ministerio de Hacienda habia dirigido el C. administrador de la aduana marítima de Veracruz, y el acuerdo dictado por el C. Presidente de la República: el informe rendido por el C. juez de Distrito de Veracruz, que por este tribunal se le pidió, y al que acompañó como justificantes, los mismos autos que ha remitido en revision; y lo pedido en esta Superioridad por el ministerio fiscal, solicitando: que se enmiende el de 16 de Mayo, por no estar conforme con las prevenciones del arancel vigente, y por ser perjudicial á los intereses de la hacienda pública.

Considerando: que si los procedimientos en general son de aprobarse por estar arreglados á derecho, no sucede lo mismo con la determinacion que abraza el auto pronunciado en 16 de Mayo y reformado por

el de 19 del mismo mes, en el cual se prevenia, que los efectos abandonados por los consignatarios, que fueron vendidos en pública subasta, pagasen solo un cuarenta y nueve por ciento, sobre el valor del remate: que en ese caso, ni por analogía, ni atendiendo á la mente del art. 48 del arancel, ha podido dictarse esa resolución, supuesto que ese artículo exceptúa del pago de los derechos á las mercancías que se hayan arrojado al mar ó vendido en otro puerto, pero no á las importadas á la República, las que segun el art. 18 del cap. 7º, deben pagar los derechos que expresa la tarifa: que la circunstancia de haber hecho abandono de las mercancías que les venian consignadas á los Sres. Kroucke y Cª, R. C. Ritter y Cª y R. Varela y Cª, no ha podido considerarse sino como una renuncia de consignación, y en este supuesto, se ha debido proceder con total arreglo á lo prevenido en los artículos relativos del cap. 13 del arancel, en los que se previene el pago íntegro de los derechos pertenecientes á la Hacienda pública, los que no se pueden disminuir, sino en caso de avería, en los términos prescritos en el art. 71 del referido arancel.

Considerando: que no satisfacen las explicaciones hechas por el juez de Distrito de Veracruz, en el informe que tiene remitido: que habiendo pasado en autoridad de cosa juzgada la expresada resolución, y habiendo causado ejecutoria, no puede revocarse ni enmendarse como solicita el C. promotor fiscal, no quedando otro recurso legal que el de hacer efectiva la responsabilidad en que se ha incurrido, por haber obrado contra derecho, que es el objeto de la revisión.

Fundado en estas consideraciones, este tribunal decreta:

Primero: Se há por revisado el expediente instruido en averiguación del naufragio del bergantín goleta inglés "Juanita," manifestado por su capitán Jhon Herbert.

Segundo: Ha lugar á proceder al juicio de responsabilidad contra el juez de Distri-

to de Veracruz, Lic. D. Luis I. Gomez, y en consecuencia á suspenderse en el ejercicio de sus funciones; al efecto, remítase testimonio de esta resolución al 2º suplente de ese juzgado, por no residir allí el primero, para que la notifique, se encargue inmediatamente del despacho, si no se interpone algun recurso, y prevenga al C. Gómez se presente en este Tribunal dentro de quince dias para la instrucción del proceso. Hágase saber, comunicándose tambien al supremo gobierno. El C. Lic. Miguel Sandoval, magistrado de ese tribunal superior de Circuito, así lo mandó y firmó.—Doy fé.—*Miguel Sandoval.*—*Felipe de J. Almazan*, secretario.—Dos rúbricas.

Otro pedimento fiscal en 2ª instancia.

Ciudadano Magistrado primer Suplente de Circuito.

El C. Juez propietario de distrito de Veracruz en su escrito de 29 de Noviembre del año próximo pasado, pide á vd. la revocación por contrario imperio de la sentencia que pronunció el C. magistrado Miguel Sandoval el 21 del mismo mes y año, constante á fojas 25, 26 y 27 de este cuaderno; y que de denegársela, le admita el recurso de apelación que al efecto interpone, por serle perjudicial la mencionada sentencia.

El promotor ha examinado con la debida detención los fundamentos que se hacen valer, y cree: que la revocación solicitada por el referido C. Juez, no procede, por tratarse de una sentencia definitiva que no puede enmendarse, ni hacersele variación alguna, segun prevención terminante de las leyes 3, 4 y 19 del tít. 22 de la part. 3ª, y por estar reservado este recurso solo á los litigantes que pueden ser oídos en el juicio. Por identidad de razón cree del mismo modo, que la apelación tampoco procede, por no estar los jueces en el caso del art. 65 de la ley de 4 de Mayo de 1857, que solo á la parte que se juzgue agraviada, otorga el derecho de alzarse de la sentencia que se le notifique.

Por lo tanto, el suscrito pide á vd. así se sirva declararlo, mandando suspender desde luego los efectos del auto apelado, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia resuelva lo conveniente, en virtud del recurso interpuesto con oportunidad por este ministerio.

Zaragoza, Enero 20 de 1874.—*Eugenio Sanchez.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Puebla de Zaragoza, 4 de Febrero de 1874.

Vistos: el recurso de súplica interpuesto por el ciudadano promotor fiscal, de la sentencia que pronunció este tribunal en 21 de Noviembre del año próximo pasado, el que solicita el C. juez de distrito de Veracruz y relativo á la declaracion que este tribunal hizo de haber lugar á proceder contra aquel funcionario, por los méritos que surgen de lo actuado en la revision que se hizo de la sentencia pronunciada por el inferior con motivo del siniestro ó naufragio del bergantin «Juanita,» consumado en el arrecife de la Anegadilla, y la apelacion que el mismo inferior interpone en caso de no acceder á la revocacion del auto relativo; el traslado que desahogó el C. promotor fiscal, con motivo de estos recursos y todo lo demas que debió verse.

Considerando: que la simultaneidad de los recursos interpuestos por las partes, importa la necesidad absoluta de distinguir uno de otro, pues que recae sobre materias diversas, la calificacion lo debe ser también: que en cuanto al de súplica; si bien los intereses fiscales son de tal privilegio que las leyes preexistentes les otorgan las mas veces las tres instancias, cuando hay la necesidad de sustanciar los juicios á cuya decision se someten, sin embargo, regla tan general, se limita en los casos especiales que las leyes prescriben: que habiéndose conformado con la sentencia en cuestion los CC. promotor fiscal y administrador de la

aduanas de Veracruz, fué propiamente el de revision: que esta superioridad confirmó en todas sus partes la sentencia de que se interpone el recurso, á escepcion de la en que se alude al juicio de responsabilidad, declaracion que cambia absolutamente la materia sobre que recae, respecto de la otra con la que está en íntimo enlace. Considerando, respecto de la revocacion por contrario imperio: que ella no es procedente en autos, que aunque interlocutorios como el de que se trata, tienen fuerza de definitiva: que equivaliendo el mismo auto al de formal prision al de las causas comunes, es evidente la procedencia de la alzada; supuesto que en ellas es admisible, con las diferencias que establece, tratándose de delitos ó faltas oficiales en los jueces, la ley de 24 de Marzo de 1813: que esta misma disposicion en los artículos que despues se citarán y sus notas relativas, previene: que con relacion á los jueces de 1ª instancia y magistrados, se admita otra instancia respecto de aclaraciones, como á la que se alude, y todo lo demas que en hecho y en derecho debió tenerse presente y ver convino; este superior tribunal, en doble grado de revision y de apelacion, debia declarar y en efecto declara, con arreglo á los arts. 76 y 77 de la ley de 4 de Mayo de 1857, improcedente la súplica interpuesta por el C. promotor fiscal, y en justo acatamiento de los artículos 14 y 23 de la ley de las Cortes de 24 de Marzo de 1813 citada ya; admisible la apelacion interpuesta por el juez de Distrito de Veracruz en ambos efectos. Y por cuanto el mismo apelante se ha escedido en varios de sus escritos, vertiendo frases indecorosas y que desdican en mucho del respeto debido á sus superiores y aun á sí mismo, por las funciones dignas que desempeña, en justo obsequio del art. 168 de la ley de 4 de Mayo citada, se le hace el mas sério apercibimiento, á fin de que en lo sucesivo no incurra en los mismos desmanes; testándose por la secretaría todas las frases en que aparezca dicha irrespetuosidad. Hágase saber y con

citacion de las partes, clávese al C. secretario de la 1ª sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion; remitiéndose con tal fin el despacho respectivo al C. juez 1º suplente del juzgado de distrito de Veracruz, y compulsándose el testimonio que pide el propietario del mismo.

Así lo mandó y firmó el C. magistrado 1º suplente del Tribunal superior de Circuito. —Doy fé: *Cantú*.—*Felipe de J. Almazan*, secretario.—Dos rúbricas.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 25 de Noviembre de 1874.

Visto en grado el presente incidente que por excitativa del ejecutivo de la Union, sustanció el tribunal de Circuito de Puebla, á fin de averiguar la responsabilidad que pudiera resultar al juez de Distrito de Veracruz, Lic. D. Luis G. Gómez, por sus procedimientos en el negocio principal de que conoció en averiguacion del naufragio del bergantin goleta ingles «Juanita» acaecido en el arrecife de la Anegadilla, y sobre aplicacion del art. 48 del arancel de aduanas marítimas, en virtud de lo cual determinó los derechos que deberian pagar á la hacienda pública las mercancías que se salvaron.

Vistos los autos principales y los escritos de acusacion á que se refiere este incidente; el informe con justificacion que rindió el juez acusado; el pedimento del promotor fiscal y el auto del tribunal de Circuito que aprobó en general los procedimientos del mismo juez, sobre declaracion de naufragio forzoso del expresado bergantin, resolviendo además, que ha lugar á proceder contra el repetido juez de Veracruz, por haber dictado contra derecho, los autos de 16 y 19 de Mayo de 1873, en los cuales se previno, que los efectos abandonados por sus consignatarios, que fueron vendidos en subasta pública, pagarán solo un 49 por ciento sobre el valor del remate; cuya resolucio-

TOMO VII.—PARTE II

concepto del tribunal de Circuito, ni por analogía, ni atendiendo al espíritu del artículo 48 del arancel, ha debido dictarse, supuesto que ese artículo exceptúa del pago á las mercancías que hayan arrojado al mar ó vendido en otro puerto, pero no á las importadas á la República, las que según el artículo 18 del capítulo 7º deben pagar los derechos que expresa la tarifa: que la circunstancia de haberse abandonado las mercancías que venian consignadas á los Sres. Kronche y Cª, R. C. Ritter y Cª, y R. Varela y Cª, no ha podido considerarse sino como una renuncia de consignacion, y en este supuesto, ha debido procederse con total arreglo á lo prevenido en los artículos relativos del capítulo 18 del repetido arancel, en los que se previene el pago íntegro de los derechos pertenecientes á la hacienda pública, los que no se pueden disminuir sino en caso de avería en los términos prescritos en el art. 71 del mismo arancel.

Vistos: el escrito del acusado, continuando ante esta 3ª sala la apelacion que interpuso del auto anterior; el que proveyó el tribunal de Circuito admitiendo en ambos efectos ese recurso, y haciendo al propio juez el mas serio apercibimiento por las palabras irrespetuosas de que usó al dirigirse al mismo tribunal; lo expuesto por el C. Lic. Luis Mendez en representacion del apelante, en la audiencia que esta sala le concedió por equidad; y considerando: que de las presentes diligencias no aparece probado que el juez de Veracruz hubiera procedido por algun motivo innoble, ó con intension dolosa al dictar los autos citados de 16 y 19 de Mayo, por lo que no hay méritos para que se le exija la responsabilidad criminal, en la cual no puede asegurarse que ha incurrido, por haber interpretado el art. 48 del arancel de modo que perjudicase el interes de la hacienda pública, en cuyo caso solo la responsabilidad civil podría exigírsele; pero es necesario tener en consideracion la poca cuantía de ese interes y el que no hay en el arancel prevencion algu-

18

na expresa, exactamente aplicable al caso de que conoció el repetido juez; pues las citadas por el tribunal de Circuito, y de cuya no aplicación se hace cargo al acusado, se refieren á la importación de efectos que se verifica ordinariamente sin contratiempo alguno hasta el puerto de su destino, lo cual no sucedió con el bergantín goleta «Juanita,» supuesto que según consta de autos, enayó fuera de las aguas territoriales de la República, y por consiguiente las mercancías averiadas que contenía y que salvó el vapor Tabasco, no puede decirse, hablando propiamente en los términos de la ley arancelaria, que se hubiesen importado al puerto de Veracruz que era el de su final destino: por esta misma razón tampoco puede considerarse el abandono que hicieron algunos consignatarios de esas mercancías, como una verdadera renuncia de consignación, para la que exige por otra parte, el mismo arancel, ciertos requisitos, que no consta en autos hubiesen precedido á dicho acto.

Por las consideraciones anteriores y con fundamento de las leyes de 24 de Marzo de 1813 y 4 de Mayo de 1857, se reforma el auto pronunciado con fecha 21 de Noviembre de 1873, por el tribunal de Circuito de Puebla, declarándose:

1º Que no ha lugar á proceder en causa formal contra el juez de Distrito de Veracruz, Lic. D. Luis G. Gómez.

2º Que se confirma el apercibimiento que se hizo al mismo juez en auto de 4 de Febrero del año próximo pasado.

Hágase saber, devolviéndose las actuaciones correspondientes al tribunal de su origen, con copia certificada de este auto, archivándose á su vez el Toca.—*José María Lozano.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Zavala.*—Por el C. secretario, *Manuel Fernández Villareal*, oficial mayor.—Cuatro rúbricas.

Son copias que certifico. México, 5 de Abril de 1875.—*Manuel Fernández Villareal*, secretario.

Pedimento del C. fiscal de la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal dice: que el C. Cipriano Piña, en calidad de fiscal del superior tribunal de justicia del Estado de Sinaloa, se ha presentado ante esa Suprema Corte acusando á los CC. Lics. Luis G. Pacheco, Pedro Bermúdez y Ladislao Caona, el primero magistrado de circuito del expresado Estado, el segundo juez de distrito, y el tercero promotor fiscal del juzgado de distrito del mismo, por faltas cometidas en sus respectivos empleos en el juicio de que conocieron y fué promovido contra los jurados de sentencia CC. José María Mendigacha, Ignacio de la Peña, Ponciano Ruiz, Carlos Navarro, Jesús Eguiluz, Plácido López, Gustavo Maldonado, José María Mediano, Francisco Donato y Gerónimo Barraza, por infracción de la ley de imprenta en sus arts. 6º, 7º, 8º, 28 y 33 y del art. 7º de la Constitución.

El fiscal del referido tribunal ha formado la acusación, porque en el juicio de imprenta expresado, se atacaba fuertemente según dice dicho fiscal, la dignidad y el decoro del tribunal en cuestión, y los funcionarios federales de quienes se queja han dejado con sus respectivos fallos, impunes esas faltas.

Como se vé, pues, en este expediente se ventilan dos asuntos muy diversos, y de los que deben ocuparse los tribunales respectivos.

Con arreglo á la ley de 14 de Febrero de 1826, las faltas de los jueces de distrito deben sustanciarse y seguirse en 1ª instancia ante los tribunales de circuito, las de los promotores fiscales ante sus respectivos distritos, y la de los magistrados de circuito, ante las salas 2ª y 3ª turnadas de esa Suprema Corte. Así, pues, si bien esa 3ª sala es competente para conocer de la acusación hecha contra el C. magistrado de circuito del Estado de Sinaloa, Lic. Luis G. Pacheco, y en esa virtud pre-

venirle que dentro del término que esa sala tenga á bien designarlo; no sucedo lo mismo respecto de las faltas del juez de distrito Lic. Pedro Bermudez, y mucho menos del promotor fiscal Lic. Ladislao Gaona.

Respecto de estos segundos, la incompetencia de esa sala es notoria, y por lo mismo debo declararla de plano, comunicando su auto al ciudadano presidente de la Suprema Corte, que fué quien le turnó el negocio, á fin de que en uso de sus atribuciones se sirva disponer lo que tuviere á bien.

Pero volviendo al magistrado de circuito Pacheco, el fiscal pide se le mande rendir el informe con justificación que previene la ley, y á fin de que pueda verificarlo con pleno conocimiento de causa, bueno será, y la equidad así lo exige, que se le remita copia certificada del escrito de acusación presentado por el C. fiscal del tribunal superior del Estado de Sinaloa, Lic. Cipriano Piña, y de las constancias que obran á fojas 2 y 3 de este mismo expediente.

México, Febrero 7 de 1874.—*Altamirano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 25 de 1874.

Vistas estas diligencias practicadas en la 3ª sala de la Corte Suprema de Justicia, con motivo de un escrito de querrela que presentó el ciudadano fiscal del tribunal superior del Estado de Sinaloa, contra el Lic. D. Luis G. Pacheco, magistrado del tribunal de circuito de Mazatlan, por haber confirmado este funcionario con su fallo de 17 de Marzo de 1873, el auto que con fecha 12 de Enero del mismo año, dictó el juez de Distrito de aquel Estado, declarando no haber lugar á proceder contra los CC. José María Mendigacha, Ignacio de la Peña, Gustavo Maldonado, Ponciano Ruiz, Carlos Navarro, Jesus Eguiluz, Plácido López, José María Medrano, Francisco Donato y Gerónimo Barraza, acusados por el mismo fis-

cal, porque formando estos ciudadanos un jurado de sentencia, habían absuelto al C. Luis Rivas, autor de un escrito denunciado como ofensivo á la dignidad y decoro del expresado tribunal de Sinaloa, infringiendo con esta resolución el art. 7º de la Constitución federal, los arts. 6º, 7º, 8º, 28º en su parte final y el 33 de la ley orgánica de 4 de Febrero de 1868, supuesto que el jurado respectivo de calificación había declarado culpable al mismo Rivas, y en consecuencia, al jurado de derecho tocaba, en concepto del querellante, imponerle precisamente la pena que señala esta ley, y que al no hacerlo así, han incurrido los acusados en responsabilidad que debe exigírseles conforme á la ley de 17 de Abril de 1821.

Visto el enunciado escrito de querrela y el informe rendido por el magistrado acusado, fundando la justificación de sus procedimientos, en que no ha fallado contra ley expresa, porque la citada de 1821 no puede reputarse como tal para el efecto de ser aplicable á esos jurados de sentencia, atendida la libertad amplia de que gozan los jurados de imprenta, por la naturaleza misma de su institución para dictar sus resoluciones; y que en este concepto, fuera del caso previsto por dicha ley orgánica de 4 de Febrero de 1868, estos jurados no son responsables en cualquiera otro, y por lo mismo no podría juzgárseles por la referida ley de 1821 ó por cualesquiera otra de responsabilidad que no hubiese sido dada con anterioridad al hecho considerando como criminoso y exactamente aplicable á él, conforme á los preceptos que contiene el art. 14 de la Constitución federal y el 182 del código penal.

Por estas consideraciones y las demás que contiene el informe rendido por el magistrado acusado y que son de atenderse como la justificación de su conducta oficial al haber pronunciado su fallo de 17 de Marzo de 1873, se declara: Que no ha lugar á proceder contra el Lic. D. Luis G. Pacheco, magistrado del tribunal de circuito de Mazatlan.

Hágase saber, y archívense á su vez estas diligencias, remitiéndose la copia certificada que corresponde.—*José María Lozano.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Zavala.*—*Sierra*, secretario.—Cuatro rúbricas.

Es copia que certifico. México, 25 de Febrero de 1875.—Por el C. secretario, *Manuel Fernández Villarreal.*

AMPARO.

Promovido ante el juzgado de distrito de Coahuila por Ponciano Zamora, contra la sentencia de muerte pronunciada en su contra por el C. presidente del ayuntamiento del Saltillo.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez.

El promotor fiscal dice: que el reo Ponciano Zamora solicita el amparo de la justicia federal contra la sentencia de muerte á que fué condenado por el ciudadano presidente del ayuntamiento de esta ciudad, conforme á la ley de salteadores.

La solicitud se funda en la incompetencia de la autoridad que pronunció aquella sentencia, por ser ilegítima á causa de haber obedecido las órdenes del gobernador C. Victoriano Zepeda, despues de destituido por el Congreso del Estado, y ademas de esto, por tratarse de una pena que no tienen derecho para imponer las autoridades políticas, por impedirlo el art. 21 de la Constitución general de la República, y en fin se funda la solicitud, en que no existiendo pruebas plenas del delito de asalto en despoblado que se atribuye al quejoso, la expresada autoridad ha violado el art. 14

de la misma Constitución, aplicando la ley de salteadores que por falta de pruebas no es exactamente aplicable al caso.

Estos fundamentos de la solicitud no son bastantes para justificar la procedencia del amparo. La ilegitimidad en que se funda la incompetencia del referido presidente del Ayuntamiento, no se deduce del hecho de haber sido obedecidas las órdenes de un gobernador destituido. Este hecho producirá la responsabilidad; mas no la ilegitimidad en que el quejoso funda la incompetencia.

Tampoco puede existir esta incompetencia en el hecho de haber aplicado una pena propia de la autoridad judicial, porque se trata de un delito en el que está suspensa la garantía constitucional consignada en el art. 21 citado.

La debilidad de las pruebas del proceso no puede fundar la procedencia del recurso de amparo. El valor legal de las que existen y su eficacia, ha sido apreciada por la autoridad que designa la ley, y la calificación que de ella se hizo no está sujeta á la revision de ese juzgado. «El exámen circunstanciado de la mayor ó menor plenitud de las pruebas, es de la exclusiva competencia del juez del delito,» que en el caso lo es el C. presidente del Ayuntamiento de esta Ciudad.

Ni puede decirse que ha sido juzgado el quejoso por una ley que no es exactamente aplicable al hecho que se le atribuye, porque la exactitud de la aplicacion se refiere á la naturaleza del delito y de ningun modo á la comprobacion mas ó menos perfecta de los hechos que lo constituyen. Esta es la interpolacion que se le ha dado al referido art. 14 en diversas ejecutorias de los tribunales federales.

Por tanto, si la apreciacion de las pruebas no importa una inexacta aplicacion de la ley; si la autoridad política tratándose de un delito de asalto en despoblado es competente para aplicar la pena de muerte; y si no existe en el mencionado Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad la ilegiti-